



Sr. Nalda García, Presidente

Sr. Estella Hoyos, Consejero y  
Ponente

Sr. Fernández Costales, Consejero

Sr. Pérez Solano, Consejero

Sr. Quijano González, Consejero

Sr. Besteiro Rivas, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 11 de febrero de 2004, ha examinado el *expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D<sup>a</sup> xxxxxx xxxxxxxx xxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

## DICTAMEN

### I

#### ANTECEDENTES DE HECHO

El día 16 de enero de 2004 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D<sup>a</sup> xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, por los daños producidos por ciervos en prados de siega de su propiedad.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 26 de enero de 2004, se procedió a darle entrada en el Registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 42/2004, iniciándose el cómputo del plazo para su evacuación, tal como dispone el artículo 53 del Decreto 102/2003, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su Ponencia al Consejero Sr. Estella Hoyos.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 3º del Acuerdo del Pleno del Consejo Consultivo de fecha 30 de octubre de 2003, por el que se determina el orden de suplencias, preside la reunión, en ausencia de la Sra. Presidenta del Consejo, el Consejero Sr. Nalda García.

**Primero.-** Con fecha de 22 de julio de 2003 tuvo entrada en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxxxx la solicitud, presentada por D<sup>a</sup> xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, de indemnización de



daños producidos por ciervos en prados de siega de su propiedad, en varios parajes de la localidad de xxxxxxxx (xxxxxxx), dentro de la Reserva Regional de Caza de xxxxxxxx.

**Segundo.-** El Director Técnico de la Reserva Nacional de Caza, con fecha 30 de julio de 2003, en su valoración de los daños, indica que éstos ascienden a 939 euros siendo 15.650 los metros cuadrados afectados.

**Tercero.-** El 12 de agosto de 2003 se acuerda por el Delegado Territorial de xxxxxxx, el nombramiento de Instructor. Se notifica a la interesada mediante aviso de recibo fechado el 25 de agosto de 2003.

**Cuarto.-** En el trámite de audiencia concedido a la interesada, ésta no realiza alegación alguna.

**Quinto.-** Con fecha de 20 de octubre de 2003, el Instructor formula propuesta de Resolución en sentido estimatorio de la reclamación presentada por la interesada.

**Sexto.-** La Asesoría Jurídica, con fecha de 28 de octubre de 2003 informa favorablemente la mencionada propuesta de Resolución, señalando no obstante que ha de añadirse el correspondiente pie de recurso.

**Séptimo.-** El expediente no se encuentra foliado, como sería conveniente.

Y, en tal estado del expediente, V.E. dispuso su remisión al Consejo Consultivo de Castilla y León para que evacuara dictamen.

## II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

**1ª.-** El Consejo Consultivo de Castilla y León emite dictamen en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo prevenido en los artículos 4.1.h,1º y 19.2 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen de acuerdo con lo establecido en el punto 4º, regla B),



apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

**2ª.-** El artículo 106.2 de la Constitución establece que *"los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos"*.

La referencia constitucional a la Ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Tales preceptos han sido desarrollados reglamentariamente por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Se ha instruido el procedimiento con arreglo a lo previsto en tales preceptos.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS de 1-3-1998; 21-4-1998; 29-10-1998; 28-1-1999; 1 y 25-10-1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (dictámenes de 27-3-2003, expte. nº 183/2003; 6-2-2003, expte. nº 3583/2002; y 9-1-2003, expte. nº 3251/2002), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.



d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

**3ª.-** Ante todo, procede señalar que concurren en la interesada los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que la competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxxx, en virtud de lo establecido en los artículos 82.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y 19 a) del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, sobre atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus Órganos Directivos Centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

Ha de corregirse por tanto la fecha del citado Decreto, al ser éste de 18 de noviembre y no de 24 de ese mismo mes.

Además la interesada ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto, consta que lo hizo con fecha 22 de julio de 2003, antes de transcurrir un año desde la fecha del hecho causante, que tuvo lugar, tal como consta en el informe del personal adscrito a la Reserva, en *"primavera del 2003"*.

**4ª.-** El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación formulada por D<sup>a</sup> xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx por los daños causados por ciervos en prados de siega de su propiedad.

Este Consejo Consultivo estima, al igual que los órganos que han informado a lo largo del procedimiento, que existe responsabilidad por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los daños



producidos, al concurrir todos los requisitos mencionados en la consideración jurídica 2ª del presente dictamen.

De acuerdo con el artículo 12.1 letra a) de la Ley 4/1996, de Caza de Castilla y León *“la responsabilidad de los daños producidos por la pieza de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá...en los terrenos cinegéticos, a quien ostente la titularidad cinegética de dichos terrenos...”*.

Asimismo, conforme establecen los artículos 19 y 20.2 del mismo texto legal, las Reservas Regionales de Caza tienen la consideración de terrenos cinegéticos y su titularidad corresponderá a la Junta de Castilla y León.

Se deduce del expediente que en el caso que nos ocupa los daños fueron producidos por ciervos procedentes de la Reserva Regional de Caza de xxxxxxxx, considerando al efecto el informe del personal adscrito a la Reserva y la conformidad del Director Técnico de la Reserva; no rompiéndose en ningún momento el nexo causal entre el hecho y el resultado dañoso, y concurriendo el resto de requisitos expuestos, trae como clara consecuencia el deber de indemnizar, en la cuantía correspondiente, que recae sobre la Administración.

No obstante, llama la atención lo extremadamente parco que resulta el informe del personal adscrito a la Reserva, en el que únicamente se detalla, en cuanto a la fecha de producción del daño que este se produjo en *“primavera del 2003”* y que *“se comprobaron las paciones de los ciervos”*. Dada la importancia de los informes emitidos por estos agentes, a efectos de determinar la relación de causalidad a través de la que se concretaría, en su caso, la responsabilidad patrimonial de la Administración, convendría que fueran más exhaustivos para poder tener conocimiento de los hechos acaecidos y de los daños ocasionados.

Debe también señalarse, la importancia de que las solicitudes de indemnización contemplen cuantos datos sean precisos para que pueda llevarse a cabo, con el menor margen de error posible, la evaluación de los daños.



**CONSEJO  
CONSULTIVO**  
DE CASTILLA Y LEÓN

### **III CONCLUSIONES**

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina favorablemente la propuesta de resolución estimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial por reclamación de daños producidos por ciervos en prados de siega propiedad de D<sup>a</sup> xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, por entender que resulta conforme al ordenamiento jurídico.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.